

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D.C. doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	11001333502920230026500
DEMANDANTE	GUSTAVO ADOLFO CAMARGO RODRÍGUEZ
DEMANDADA	NACIÓN – RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONTROVERSIA	CONCURSO DE MÉRITOS - CONVOCATORIA 27

OBJETO

Procede el Despacho a proveer lo pertinente, teniendo en cuenta que el suscrito se encuentra inmerso en causal de impedimento y conflicto de intereses para conocer del asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

De conformidad con la demanda (02Demanda.pdf) las **pretensiones** se encuentran encaminadas a:

2.1. Anulación de los actos administrativos demandados

- Acto administrativo contenido en la resolución CJR22-0351 de 1o de septiembre de 2022, expedido por la Unidad de Carrera administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para resolver la situación jurídica de los aspirantes que interpusieron recurso de reposición contra la fijación de resultados de la prueba de conocimientos.
- Acto administrativo contenido en la resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023, anexos 1 y 2 igualmente expedido por la Unidad de

Carrera del Consejo Superior de la Judicatura, para los aspirantes interesados en el cargo de Juez Administrativo.

- Acto administrativo calificadorio de la prueba de conocimientos, con referencia especial a las preguntas Nos. 6, 7, 9, 28, 34, 62, 63, 65, 69, 102 y 108, del texto de la prueba de conocimiento y aptitudes.

Para el efecto aquí indicado relativo a la nulidad deprecada respecto a la calificación obtenida por la demandante en la prueba de conocimientos y respecto de las preguntas que se acaban de enunciar, deberá darse aplicación cumplida a la previsión que estableció el inciso segundo del artículo 110 de la Ley 2022 de 2022, y por esa razón habilitar el puntaje hacia arriba de las preguntas atrás enunciadas, por lo tanto se ordenará a la parte demandada contabilizar como favorable las preguntas atrás referidas.

- En consecuencia, de lo anterior se ordenará a la universidad nacional incrementar el puntaje obtenido por la parte demandante en la prueba de conocimientos y aptitudes, con la incidencia legal para los efectos del concurso previstos en la convocatoria, que implica su aprobación y la vocación para continuar en las fases siguientes del concurso.

2.2. Restablecimiento en el Derecho.

- Se ordene a título de reparación del daño en los términos del artículo 138 del C.P.A.C.A., como consecuencia de las nulidades decretadas se disponga la reparación del daño conforme a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del Consejo de Estado radicado con el No. 11001-03-25-000-2017-00151- 00 (8922017) en la que la alta corporación resolvió un recurso extraordinario de

unificación de jurisprudencia donde determinó que los máximos indemnizatorios en los procesos laborales ante lo contencioso administrativo equivaldrán hasta 24 meses de los salarios y prestaciones dejados de devengar que para el caso equivaldría a \$457.282.050 COP valor correspondiente al costo de oportunidad al no poder acceder al nombramiento por mérito al cargo de Juez Administrativo como es el caso del señor demandante. Claro está, siempre y cuando que la sentencia salga en fecha posterior a la consolidación final de los nombramientos que arroje el concurso y que hagan imposible jurídicamente su ingreso a la función pública de la administración de justicia.

- En forma subsidiaria, y en la hipótesis que el fallo se produzca antes de las previsiones anotadas en la pretensión anterior, también como restablecimiento en el derecho se dispondrá que a la demandante se le permita ingresar a la segunda fase del concurso de méritos, que comprende el curso concurso y demás pruebas que lo complementan de tal manera que pueda integrar la lista de elegibles para Jueces Administrativos en los términos establecidos en la Ley 270 de 1996 y la convocatoria expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PCSJA18-11077 de 2018.

CONSIDERACIONES

El artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, al establecer el deber para los jueces y magistrados de declararse impedidos, además de enlistar algunas causales para el efecto, que también se erigen como situaciones que ameritan recusación; remite a las causales consagradas en el artículo 141 del Código General del Proceso, entre las que se encuentra la de tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

En el mismo sentido, el Código Único Disciplinario aplicable a los servidores públicos y consagrado en la Ley 734 de 2002, al regular el régimen aplicable a los funcionarios de la rama judicial en el artículo 196 determina que constituye falta disciplinaria, entre otras conductas, la inobservancia de los impedimentos y conflicto de intereses previstos en la Constitución, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 196. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Subrayado fuera del texto original.

Con respecto al “conflicto de intereses” que se menciona en el anterior precepto, el artículo 40 del mismo compendio normativo preceptúa lo siguiente:

“Artículo 40. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión,

(...).

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido”.

Teniendo en cuenta lo normado en las anteriores disposiciones y, retomando las pretensiones de la demanda ya referenciadas, es del caso señalar que, el suscrito, con la

expectativa de ascender a un cargo dentro de la rama judicial, participé de la conocida Convocatoria 27 que se menciona en la demanda.

En el mismo sentido, son de público conocimiento las múltiples inconformidades que han suscitado con ocasión del desarrollo del respectivo concurso de méritos por la citada convocatoria; que ha trascendido a diversos sectores de la sociedad, pues ha habido pronunciamiento expreso por parte, no solo los participantes de la convocatoria, sino también otros sectores como son, la academia, los medios de comunicación, los ciudadanos que aún no forman parte de la rama judicial y otros; posturas que se han venido ventilando en los diversos estrados judiciales hasta la fecha, al punto de haber considerado la posibilidad en un momento dado de declarar la nulidad de toda la actuación, con lo cual, se dilataron dichas actuaciones, se estuvo a la espera de pronunciamientos definitivos, lo que en todo caso no ha implicado que a la fecha, se hayan superado las aludidas inconformidades.

Con todo, en cumplimiento de los deberes que me asisten, no puede dejar de manifestar este funcionario el interés de carácter subjetivo y directo que le asiste frente al tema puntual señalado en la demanda promovida así como a los miembros de mi equipo de trabajo, quienes también formaron parte de la citada Convocatoria 27 siendo relevante de manera personal y como grupo, la decisión o resultados de la controversia, en razón a similares condiciones y derechos particulares, predicables en condición de participantes de la Convocatoria 27; circunstancias que podrían tener incidencia en la recta e imparcial administración de justicia, por estar inmerso un evidente conflicto de intereses con ocasión de la expectativa que se tendría en las resultas de procesos como este.

Ahora bien, con relación al trámite de los impedimentos de los Jueces Administrativos, el artículo 131 de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente:

“Artículo 131. Trámite de los impedimentos.

Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto. (...)"

Con todo y de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se torna imperativo para el suscrito declararse impedido para conocer del presente asunto y, en observancia de la anterior disposición, remitir el expediente al Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintinueve Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá

RESUELVE

PRIMERO: DECLARARSE IMPEDIDO para conocer del presente asunto, de acuerdo a la causal prevista en el numeral 1º del artículo 141 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al señor Juez Treinta Administrativo de Bogotá – Sección Segunda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

MV

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
DEMANDANTE:	juris.gomez.asociados@gmail.com